

**Conflicto e (in)visibilidad**

**Retos en los estudios  
de la gente negra en Colombia**

Eduardo Restrepo – Axel Rojas  
Editores



Editorial Universidad del Cauca  
Colección Políticas de la alteridad

© Editorial Universidad del Cauca 2004

© De los autores

Grupo de Investigaciones para la Etnoeducación  
Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Primera edición  
Septiembre de 2004

Editores académicos:  
Eduardo Restrepo y Axel Rojas

Editor General de Publicaciones:  
Felipe García Quintero

Diseño y diagramación de la serie editorial:  
Enrique Ocampo Castro

Copying Left

Los documentos de esta publicación pueden ser reproducidos total o parcialmente, siempre y cuando se cite la fuente y sean utilizados con fines académicos y no lucrativos.

Las opiniones expresadas en los documentos que componen esta publicación son responsabilidad de los (as) autores (as). La financiación de la publicación por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–, no significa coincidencia con los puntos de vista allí expresados.

ISBN: 958-9475-59-0

Impreso en Feriva, Cali, Colombia.

# Contenido

<b>Presentación .....</b>	<b>11</b>
<b>Agradecimientos .....</b>	<b>15</b>
<b>Introducción</b>	
Eduardo Restrepo - Axel Rojas .....	17
<b>Desplazamiento, conflicto y desterritorialización .....</b>	<b>33</b>
<b>Geografías de terror y desplazamiento forzado en el     Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y     buscando respuestas</b>	
Ulrich Oslander .....	35
<b>Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico     colombiano</b>	
Arturo Escobar .....	53
<b>Dinámica y consecuencias del conflicto armado     colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterrito-     rialización de afrocolombianos e indígenas y ‘multicul-     turalismo’ de Estado e indolencia nacional</b>	
Oscar Almario .....	73
<b>Negándose a ser desplazados: afrocolombianos en     Buenaventura</b>	
Santiago Arboleda .....	121

<b>Subalternización e (in)visibilidad .....</b>	<b>139</b>
<b>De la esclavitud al multiculturalismo: el antropólogo, entre identidad rechazada e identidad instrumentalizada</b>	
Elisabeth Cunin .....	141
<b>Subalternos entre los subalternos: presencia e invisibilidad de la población negra en los imaginarios teóricos y sociales</b>	
Axel Rojas .....	157
<b>No todos vienen del río: construcción de identidades negras urbanas y movilización política en Colombia</b>	
Carlos Efrén Agudelo .....	173
<b>El patriarca imposible: una aproximación a la subjetividad masculina afrocaribeña</b>	
Julia Eva Cogollo - Juliana Flórez-Flórez - Angélica Nãñez .....	195
<b>Presencia negra en la zona bananera del Magdalena: invisibilidad de una permanencia</b>	
Cristian Manuel Olivero Pavajeau .....	209
<b>Implosión identitaria y movimientos sociales: desafíos y logros del Proceso de Comunidades Negras ante las relaciones de género</b>	
Juliana Flórez-Flórez .....	219
<b>Políticas de la representación, multiculturalismo e interculturalidad .....</b>	<b>247</b>
<b>Los guardianes del poder: biodiversidad y multiculturalidad en Colombia</b>	
Peter Wade .....	249
<b>Biopolítica y alteridad: dilemas de la etnización de las colombias negras</b>	
Eduardo Restrepo .....	271
<b>Nuevas encrucijadas, nuevos retos para la construcción de la nación pluriétnica: el caso de Providencia y Santa Catalina</b>	
Camila Rivera .....	301

**Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina:  
construyendo etnoeducación e interculturalidad en la  
universidad**

Catherine Walsh ..... 331

**Sobre los autores ..... 347**

## Negándose a ser desplazados: afrocolombianos en Buenaventura

Santiago Arboleda

“Estamos ‘enrollados’ como culebra asustada, como pequeño animal de monte cuando lo apalean, nos sentimos acorralados; pero por asustada que esté la culebra toma fuerza y sale a picar, y por acorralado que esté el animal siempre salta llevándose lo que sea por delante para salvarse. Nosotros nos estamos enrollando, no sé para qué, pero no hemos perdido las esperanzas”.

**A** sí respondió doña Lucrecia cuando le pregunté sobre la situación por la que estaban atravesando en su reciente condición de desplazados. La había conocido hace varios años como cantora de jugas, currulaos, bundes, y alabaos; minera, agricultora y curandera en un río del Pacífico vallecaucano.

Las notas que se esbozan a continuación, que no son más que apuntes exploratorios sobre la situación de los afrocolombianos desplazados, se enmarcan en la visión testimonial ‘esperanzadora’ de doña Lucrecia. Me orientó de manera central a perfilar algunas estrategias puestas en funcionamiento por las comunidades afrocolombianas, en conjunto con otros actores, en el contexto del conflicto armado; esto es, cómo están tratando de vivir en medio de la guerra, en condiciones de desplazamiento y de secuestro en sus propios territorios, bajo la fuerte presión ejercida por los grupos armados.

Para encuadrar brevemente la situación, en primera instancia, mostraré algunos rasgos contextuales de Buenaventura desde la década de

los setenta. A continuación presentaré los principales acontecimientos causales de desplazamiento hacia el área urbana; luego puntualizaré algunos tópicos de la incidencia del conflicto armado en la vida cotidiana. Por último trataré de destacar algunas salidas o sus visualizaciones elaboradas por las comunidades, tanto rurales como urbanas, frente a los actores en conflicto.

### **La eterna frustración de la Buenaventura**

La década de los setenta es para Buenaventura un periodo caracterizado por la constante protesta social. Aunque el puerto marítimo en ese momento era el principal del país y avanzaba en su proceso de consolidación infraestructural, altos índices de desempleo y déficit de servicios sociales inundaban la vida cotidiana de la ciudad. De alguna manera, distintas modalidades de contrabando morigeraban la situación; algunas de ellas en conexión directa con el muelle de carga y descarga. Estos movimientos de contrabando sostenían un grueso sector de la economía informal y, desde luego, alimentaban los senderos pseudoclandestinos de la ilegalidad.

En dicho contexto, y ante las pretensiones de la aduana por controlar los flujos de mercancía ‘clandestina’, los días 3 y 4 de junio de 1970 se desató un movimiento popular cuyo saldo fueron cuatro muertos, entre ellos dos estudiantes de bachillerato y un importante número de heridos de gravedad, debido a la represión de la fuerza pública. Esta situación hizo necesaria la presencia de las autoridades gubernamentales de orden nacional, de la que se derivó un conjunto de promesas, entre las cuales la más importante fue el aceleramiento de la zona franca.

Ahora dice el viceministro, si Buenaventura colabora será mucho lo que se podrá concretar. Acaba de dictarse el decreto sobre la creación de la zona franca industrial y comercial de occidente, que tiene la doble sede de Palmaseca en Cali y el Puerto. Esa sede significa para Buenaventura la posibilidad de un gran parque industrial, que como conjunto de empresas, ofrece numerosas oportunidades de empleo (*El Espectador*, junio 9 de 1970).

Adicionalmente prometieron la creación de empresas cooperativas ligadas al sector pesquero y el estudio de obras de infraestructura pública urgentes en Buenaventura, todo apuntando a generar algunos empleos como paliativos ante la crítica situación.

*El Espectador* cierra la noticia planteando una metáfora bastante ajustada al entorno, que conecta las condiciones naturales marítimas de

Buenaventura y que en últimas constituyen el aspecto de mayor interés foráneo: la de la producción económica que significa para la nación colombiana esta oferta ambiental. Hasta cierto punto esta situación revela la precariedad infraestructural y, en general, del desarrollo en la ciudad, ligada desde luego a la fuerte dependencia del Estado central que le ha asignado su papel en la vida económica del país, de una manera tan rígida y determinada que pendula en su discurrir el peso de esta inercia. “La marea ya bajó en Buenaventura y nuevamente esa ciudad que necesita convertirse en un centro metropolitano, según el concepto del viceministro, entra en órbita de producción de más y de más divisas para el país” (*El Espectador*, junio 9 de 1970).

Llama la atención que la realidad que se quiere velar resulta transparente; la marea alta, en tanto cúspide representando la protesta social que amenaza con romper lo establecido, salirse de la órbita, de los límites, resulta censurada de trasfondo, pero revelada por antonomasia. Efectivamente, Buenaventura en marea baja, manejable, constatando la imagen externa del diario vivir con su promesa de desarrollo a cuestas, siguió y sigue produciendo más y más divisas para el país, mientras sus frustraciones se agolpan de manera exuberante como sus lluvias.

Dos años después de este acontecimiento, el célebre poeta y político Helcías Martán Góngora, quien desempeñó importantes cargos públicos en el puerto, escribió un artículo periodístico muy deciente y esclarecedor sobre la postración económica y social en que continuaba sumida Buenaventura. Observemos lo registrado por Helcías:

Las ‘siete plagas’ afectan al puerto, S.O.S por Buenaventura

Las siete plagas de Buenaventura son: la malaria, la tuberculosis, el desempleo masivo, la miseria fiscal o falta de justicia distributiva, la inseguridad general y la prostitución.

A los siete flagelos egipcios hay que agregar [...] el de la disminución de los aportes decretados para el funcionamiento de la zona franca. La única salida del subdesarrollo en que subsiste, desde hace varias centurias la muy hospitalaria ciudad que fundó —para perpetua memoria de su nombre— el licenciado Pascual de Andagoya.

Lógicamente los recortes presupuestales en el proyecto de las zonas francas de Palmaseca y Buenaventura repercuten en el fenómeno de la falta de trabajo en el puerto al cual confluyen gentes desplazadas por la violencia económica de todo el litoral Pacífico.



Castigada injustamente dentro de un plan de reajuste financiero, Buenaventura requiere un tratamiento especial, ya que su aduana ocupa sitio singular por su contribución al erario común, a través de los derechos de importación y exportación que genera el primer puerto del Pacífico Sur.

No se trata de una inversión a título gratuito, sino de una erogación que, como en el caso de Barrancabermeja, debería traducirse en regalías aduaneras (*El País*, agosto 4 de 1972).

Cabe reconocer el tono de denuncia, protesta y a la vez reclamo que atraviesa al artículo de Martán. La aduana como entidad de control que había desatado el nudo de incorformidades expresadas en la revuelta social antes indicada —debido a su eficacia en la desarticulación de algunos nichos de economías clandestinas— no representaba ni reportaba al municipio los ingresos que le permitieran avanzar en sus proyectos y, en la práctica, había estimulado un problema social casi imposible de resolver. De forma complementaria se evidencia el limitado impacto positivo que tuvo la zona franca, presentada a la comunidad como la salvación ante el desempleo. Es decir, estos dos entes estatales orientados a optimizar el rendimiento portuario, que para ese momento, representaba el principal centro de movimiento de mercancías en el país, superando en su orden a los puertos de Barranquilla y Tumaco,<sup>1</sup> no habrían cumplido con el cometido. Así dieron al traste nuevamente con las expectativas de los grupos de poder local y de la población en general. Esto también se observó con el paulatino desmonte de la zona franca a lo largo de la década de los ochenta. Los efectos con el transcurso del tiempo son obvios: Buenaventura lejos de la justicia distributiva que solicitaba Helcías Martán, aparece castigada en forma múltiple.

De otro lado, el puerto ha sido la zona de intersección y confluencia de los pobladores del Pacífico, por ello receptáculo de los desplazados por la violencia económica. En el mismo sentido, el sacerdote Gerardo Valencia Cano mostró de qué manera las invasiones de los terrenos de bajamar y de otras zonas periféricas eran el envés del agresivo y acelerado saqueo de recursos naturales que estaba viviendo el Pacífico a nombre del progreso y la modernización (Jaramillo 1972). En otros términos, ante la desarticulación de sus economías, los campesinos se desplazaban a la ciudad en grandes contingentes para reiniciar sus vidas como asalariados o vendedores ambulantes. En este marco, la situación crítica del puerto se agudiza a lo largo de los setenta y las décadas siguientes.

---

<sup>1</sup> En este momento Buenaventura movía el 59,5% de las exportaciones y el 44,1% de las importaciones. Para mayor amplitud comparativa, véase Valdivia (1994:111).

A lo anterior se sumó el cierre definitivo de Colpuertos en 1993, el cual, después de 35 años de funcionamiento, dejó 2.500 trabajadores sin empleo. Al respecto no me detendré, debido a que lo estrepitoso del caso —por los niveles de corrupción encontrados en esta empresa— lo hizo ampliamente conocido en el país.

Está rápida retrospectiva, puntualizando lo sucedido con las dos principales empresas estatales generadoras de empleo, quiere ilustrar que a Buenaventura el siglo XX le dejó, como saldo general, el desmantelamiento de las empresas privadas y estatales, lo cual contrasta con una fuerte migración no sólo del Pacífico, sino además del centro del Valle del Cauca y otros departamentos como Caldas, Antioquia y Quindío.

En las últimas décadas se amplió y profundizó el conflicto social, dejando como huellas espaciales las invasiones de territorios urbanos, a tal punto que cerca del 60% de la ciudad ha sido poblada mediante esta modalidad. No es necesario ahondar en las implicaciones que lo anterior tiene en términos de oportunidades sociales adecuadas. El cuadro actual, tal como se presenta en muchas fuentes oficiales (por ejemplo, POT Buenaventura, 2000), muestra a Buenaventura aún como el puerto más importante con el que cuenta el país, en la medida en que mueve entre el 60 y 65% de la carga que entra y sale del territorio nacional. Cuenta con una población que oscila entre 350 y 400 mil habitantes. El desempleo rebasa el 65%, mientras que el 60% de la población urbana se encuentra en estratos 1 y 2, y sus índices de violencia son alarmantes, se trata en su mayoría de homicidios a jóvenes en el casco urbano.

Al observar la institucionalidad estatal se aprecia una significativa incidencia en la desestructuración económica de la población tanto urbana como rural, dados los estrechos nexos existentes entre las economías públicas y privadas, como se ha señalado. En esta dirección quiero insistir en la idea trabajada por Alfredo Molano (2001) acerca de que la acumulación de problemas en amplios periodos aporta decisivamente a una explicación estructural de la violencia en Colombia. A pesar de las diferencias entre la pasada violencia y la actual, subyacen los problemas sociales no resueltos, expresados como conflictos latentes. Buenaventura, al menos desde los años cuarenta, tipifica un buen ejemplo de esta situación. Pese a las diversas críticas a este planteamiento, por su supuesto determinismo económico, me resulta central y, en consecuencia, de mucha utilidad en el análisis.

### **“Y me dijo tres palabras que no entendí”**

“Que eran guerrillos fariseos y en la jugada con los paras; me dijo el muchacho sobre la gente que había llegado y que por eso de pronto no

volvían a darnos las capacitaciones sobre nuestros derechos”, recordaba don Juancho lanzando su memoria hacia el año 96. *“Desde ahí en el río ha sido un solo correr y llover de lágrimas y sangre”*

La dimensión en que nos instala don Juancho, la novedad de un discurso que se va apoderando de la cotidianidad y que disputa lugares o se juxtapone a otros que venían incorporando las comunidades acerca de sus derechos, en el marco de la difusión de la Ley 70 de 1993 y la concientización sobre la importancia y defensa de la biodiversidad, amerita detenernos. Los planteamientos sobre los derechos étnicos territoriales, frente a los introducidos por las prácticas de la guerra, ambos movilizandolos vocabularios de relativa novedad en la región, deben llamarnos la atención, en la perspectiva de comprender una mentalidad que se reestructura para contextualizarse ante los embates cada vez más rápidos, agenciados por nuevos actores, que configuran contextos sin precedentes y desde luego dinámicas inéditas.

En esta dirección me parece, como hipótesis, que del reconocimiento, aprehensión, comprensión e interpretación de los nuevos términos, conceptos y discursos que se imponen y cruzan en los imaginarios de los sujetos y organizaciones comunitarias, depende en gran medida la eficacia en la estructuración e implementación de nuevas estrategias de resistencia. Estrategias que, apoyadas en las experiencias propias o similares, contextualicen y den sentido a los nuevos conceptos que se introducen y que se seguirán vehiculando en la región. En otras palabras, de este hecho en relación con el tiempo en que sucede la apropiación, depende la posibilidad de comunicación horizontal y efectiva con diferentes actores internos y externos en la región, como potenciales aliados para resistir.

No se habían comprendido aún muy bien los paradigmas sobre los derechos étnicos-territoriales y el desarrollo equilibrado, cuando se estaba en pleno proceso de discusión entre las comunidades tanto rurales como urbanas, sobre estos y otros temas relacionados. Aparece entonces la coercitiva avalancha discursiva, en la cual confundir el nombre de los actores cuesta la vida. Así, de un lado, aparecen nuevos agentes que irrumpen imponiendo y exigiendo nuevas prácticas; de otro, se encuentran las comunidades que para albergar algunas posibilidades de defensa frente al genocidio, se enfrentan a la ingente necesidad de incorporar presurosamente los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y sus implicaciones para la pervivencia comunitaria, entre otros ‘puentes discursivos’ contruidos de emergencia. No deja de sorprender tanta novedad en tan corto tiempo.

Surgen entonces algunos interrogantes: ¿Cómo se reestructuran estas mentalidades en la óptica del ejercicio de sus derechos étnico-territoriales, en el continuo rural-urbano y viceversa? ¿Qué nuevas lógicas se originarán en el proceso de transformación social radical que significa este conflicto para la región? ¿Qué sentido tendrán las resignificaciones con-

ceptuales en la ruta de las autoafirmaciones políticas?<sup>2</sup> Desde luego las apropiaciones diferenciadas que sugiere este proceso según las generaciones, localizaciones y trayectorias vitales, nos abren un campo de indagación en el cual nuevamente está en juego la capacidad de respuesta, las adaptaciones, las construcciones e innovaciones que caracterizan a las comunidades afrocolombianas en el arrinconamiento sistemático que han soportado y que fingen desconocer vastos sectores del país.

Para tratar de mostrar la incidencia del conflicto armado, observemos en la Tabla 1 una síntesis de los principales acontecimientos causantes de desplazamiento.

**Tabla 1. Eventos violentos generadores de desplazamiento masivo hacia Buenaventura.**

Eventos	Lugar y fecha	Desplazados	
		No. Familia	No. Personas
Incursión de la fuerza pública en la vereda de San José de Anchicayá.	San José de Anchicayá, marzo de 1996	8	85
Llegada paulatina y progresiva de familias, procedentes de Antioquia, Córdoba, Chocó, Risaralda.	Antioquia, Córdoba, Chocó, Risaralda. 1997	25	140
Presencia inesperada hostigante y temporal de la fuerza pública en comunidades del río Raposo.	Río Raposo 1998	17	92
Enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla.	Río Anchicayá 1999	215	1290
Presencia de familias chocoanas repartidas desde Panamá.	Panamá Junio de 1999	5	31
Enfrentamiento entre el ejército y grupo armado	Sabaletas Octubre de 1999	205	1230
Toma guerrillera a la cabecera municipal.	Juradó - Chocó 16 de diciembre 1999	82	492
Presencia de autodefensas.	Campo Hermoso 7 de abril de 2000	48	288
Incursión de las autodefensas al río Anchicayá, zona carretable.	Sabaletas, Aguacalara, Llano Bajo, etc. 11 de mayo de 2000	452	2712
Incursión de las AUC en la carretera Cabal Pombo.	Los Tubos, Katanga, Bendiciones. 13 de julio de 2000	27	162
Enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla.	Bellavista Río Anchicayá 12 de agosto de 2000	4	20
Presencia de las AUC en la carretera Cabal Pombo.	Triana, Zaragoza 26 de agosto de 2000	8	45

Fuente: Comité de atención a la población desplazada

<sup>2</sup> En otro trabajo he aludido a este proceso de apropiación lingüística y experiencial, con el concepto de 'tiempo de aprehensión'; sintéticamente, lapso en el cual se han adquirido los conocimientos básicos indispensables para comunicarse con cierta coherencia en un nuevo contexto de relaciones (Arboleda 2002).

Los acontecimientos registrados nos permiten sugerir dos momentos diferenciados por la intensidad de los desplazamientos, en la medida en que el conflicto armado se va arraigando paulatinamente, enrollando a las comunidades. El primer momento va desde 1996 a 1999, caracterizado por la presencia de la guerrilla —no interesa precisar grupos— y el ejército nacional. El segundo momento va desde abril de 2000 en adelante, marcado por la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En total se contabilizan como desplazados registrados 6.200 personas hasta el 2001, según el Comité de Atención a la Población Desplazada y la Comisión de Verificación (mayo 5, 6 y 7 de 2001). Sin embargo este estimativo se considera poco confiable para visualizar en sus reales dimensiones el fenómeno, teniendo en cuenta los subregistros y las trayectorias distintas que adoptan muchos desplazados.

Con cierta sorpresa escuchamos a través de los medios de comunicación en mayo de 2000, ante el silencio cómplice generalizado de las élites políticas y económicas locales, de los labios del único jefe de las Autodefensas hasta ese momento, el señor Carlos Castaño, el anuncio de su llegada al casco urbano de Buenaventura por solicitud de los comerciantes. Su presencia coincide curiosamente con los anuncios masivos de preparación y posterior implementación de la Zona Económica Especial para la exportación, en la cual importantes sectores económicos del país, la región y sus representantes en la localidad, han centrado su atención.<sup>3</sup>

### **“Nos sentimos acorralados”**

Las obras de infraestructura, adecuando las condiciones para la puesta en marcha de los proyectos anunciados, avanzan en medio del terror, ante los ojos atónitos y las bocas sin palabras de los individuos y las comunidades que son reubicadas con sus ventas o mueven sus viviendas para dar paso a las paralelas del tren, a la ampliación de las vías, y/o a las redes de teléfonos, a nombre de la modernización urbana y del mejoramiento del ornato ciudadano. Todo envuelto en una tensa tranquilidad cotidiana. Las tractomulas entran y salen como parte de una inercia pasmosa que encubre la inconfesa atmósfera social, densa y constreñida, en que transcurren los días arriados por las manos del ángel insensible de la Buenaventura, que con su frente en alto va poblando las calles y pasajes con sus pisadas sangrantes.

---

<sup>3</sup> Este proyecto debe considerarse en conjunto con los otros macroproyectos de construcción y adecuación portuaria, que profundizan la inserción de la costa Pacífica como puerta del país, en la cuenca internacional del Pacífico y, en general, en el concierto de la globalización económica.

Cada esquina se torna en testimonio de un sueño mutilado, del sentimiento amordazado que corre, se arrastra o se revuelca sin saber por qué esperpentos, acelerando la llegada de la noche que se quiere depositar por siempre calurosa, sólo sofocada por las lluvias que como en antaño prueban, aunque ya en el olvido, que la tunda está pariendo. A juzgar por la soberbia del agua es un parto difícil, o quizás en estos tiempos no pueda dar a luz. Para un líder comunitario,

Ahora discurrimos sobre la desconfianza, el silencio total, ya no conversamos en los colectivos y taxis como antes, no miramos a nadie más de dos veces, menos si es extraño, de los cuales hay bastantes, uno no sabe si el vecino es para, guerrillero, informante; ya no sabemos quién es quién.

Este confinamiento del tejido social, de los sentidos de comunidad y de vida colectiva, fundador de una zozobra que impide relaciones interpersonales fluidas, está fundamentado en la vinculación de mucha población joven de las comunidades a los distintos grupos. “Se van, trabajan con nosotros, o se mueren”, fue la consigna con la cual los paramilitares reclutaron gran parte de la delincuencia común en la ciudad. En esta situación, los sectores están fragmentados y controlados de hecho.

Agrega el líder:

En los barrios y sitios donde antes estuvo la guerrilla, allí fue donde se dieron las matanzas y ahora son territorios paramilitares. En su mayoría son los de bajamar, los que rodean la isla y la comuna 12 a la entrada de la ciudad, son los sectores más pobres: El Cristal, Los Pinos, El Pailón, Antonio Nariño, El Piñal, R9, Pueblo Nuevo, Viento Libre, El Embarcadero. Mejor dicho, estamos rodeados. Ellos controlan las salidas y entradas por agua. Ellos dicen que ahora no hay ladrones, pero el miedo nos está robando la alegría, la vida.

La disputa por el control del territorio, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales es diaria. Los grupos armados se rotan delineando una geoestrategia en la cual un grupo suplanta a otro por la fuerza, mientras el vecindario soporta las consecuencias de las masacres sin poder hacer ningún pronunciamiento, dado que constatan también la indiferencia y la complicidad de las autoridades competentes. Como ejemplo, en un forcejeo territorial, los vecinos testimoniaron que fueron reunidos por un escuadrón paramilitar en una caseta comunal para

informar sobre su hegemonía en adelante y las reglas de convivencia que debía observar el vecindario. Transcurrido un tiempo de la reunión se acercó una camioneta de la policía, por lo cual los asistentes echaron a correr presintiendo algún tipo de enfrentamiento armado. Tal fue la sorpresa cuando los paramilitares les hablaron en tono alto y enfático a los policías recordándoles que previamente les habían informado de la celebración de esta reunión que acababan de dañar y que ojalá no se volviera a presentar este incidente.

Este trashumar de los grupos armados en los barrios restringe la movilidad de los habitantes en determinados sectores de la ciudad, fija horarios y define fronteras en los vecindarios en la medida que sólo pueden ser transitados en la práctica por sus habitantes. Los foráneos quedan excluidos al no tener referentes parentales, vecinales o de amistad que faciliten su movilidad o ingreso a ciertos espacios y en determinadas horas, especialmente nocturnas. De tal forma, la espacialidad cercenada a los ciudadanos contrae la ciudad y reduce notoriamente la vivencia del espacio público; es decir, en últimas se avasalla el ejercicio de la ciudadanía.

Esta rápida imposición de otros códigos de convivencia es registrada también por el profesor Jorge García (2002:3) para el caso de Tumaco, quien destaca la desarticulación de las solidaridades amplias que operaban en las redes sociales de apoyo y el reclutamiento de sujetos de la comunidad por parte de los grupos armados. En esta dirección se revela también lo estudiado por Agier y Hoffmann (1999:115), para el caso de Cali en el barrio Sardi del Distrito de Aguablanca. En éste encontraron cómo una de las estrategias de inserción de los desplazados es camuflarse, ocultar su condición de desplazados para sobrevivir y no padecer la estigmatización propia que esto implica frente al resto de los habitantes del barrio, por lo que algunos desplazados se movilizan entre varios barrios periféricos o cambian de ciudad retornando periódicamente en un tiempo relativamente corto, para evitar además ser objetos de las redadas de limpieza social.

Por su parte Mosquera y Bello (1999: 466), para el caso de los desplazados en el municipio de Soacha, coinciden con los anteriores autores en cuanto a las exclusiones que sufren y la posición de tensión a la que se enfrentan. Ellas encontraron que una parte de los habitantes expresan solidaridad parcial, mientras la otra expresa por momentos rechazo directo, debido sobre todo a los temores de no saber con claridad si están vinculados a algún grupo armado; es decir, por la inseguridad que potencialmente llegan a representar los desplazados en el barrio. Estos trabajos coinciden en que, en esta circunstancia, el desplazado asume una 'nueva identidad' que le permite vivir en una situación de

refugio. Justamente en este sentido las ciudades se imaginan como ‘zonas refugios’ o ‘escondites’ cada vez más inseguros, a medida que se amplía el conflicto armado a nuevas regiones.

Lo anterior se puede constatar muy bien en Buenaventura con el traslado del enfrentamiento de la zona rural a la ciudad. Es así como después de que las AUC asesinaran en el barrio las Américas del casco urbano a Tulio García Murillo de 25 años y a Modesto Hurtado de 32 años en barrio la Unión de Vivienda, acusados de ser colaboradores de la guerrilla (*El País*, mayo 23 de 2002), quienes habían salido en el grupo de desplazados de Zabaletas hacía dos semanas, después de la masacre de doce personas por parte de las AUC. La población urbana evitó establecer algún tipo de contacto directo con los desplazados, mientras estos deambulaban solos o en pequeños grupos como parte del paisaje decrepito de la ciudad.

### **“Nosotros nos estamos enrollando, no sé para qué”**

Doña Lucrecia, en su reflexión sobre la situación de la comunidad, ‘adivina’ o imagina que en esta turbulencia de los acontecimientos enrollarse guarda sentidos profundos de organización. Según su metáfora rural aplicada a la nueva experiencia urbana que están viviendo, ‘enrollados’ riñe con la visión de fraccionamiento que evidentemente muestra este proceso. Precizando más la indagación, vale la pena preguntarse en el seno de estas comunidades quiénes se sienten enrollados y a qué núcleo estructurante remite esta imagen. Más cuando su mirada enfatiza en el futuro, no sé para qué el enrollamiento. En esta orientación trataré de mostrar algunos elementos indicativos de inestables, flexibles y urgentes estrategias que se acarician para ‘vivir en medio del conflicto’, pero ante todo que fijan una óptica posconflicto armado.

Hablemos entonces de los esbozos estratégicos, enfocando tanto a las instituciones como a las comunidades. En este orden de ideas resulta revelador el silencio de la Federación de Municipios de la Costa Pacífica Colombiana,<sup>4</sup> en su Plan estratégico 2001–2003, sobre el tema del conflicto armado y el desplazamiento como tópicos específicos en la actualidad de la región. Se debe reconocer que pese a su fragilidad y

---

<sup>4</sup> Esta Federación, cuyo objeto central apunta al fortalecimiento institucional de la región del Pacífico, fue constituida en junio de 1998, bajo el esquema corporativo de una asociación por cada subregión, así: Atrato, San Juan, Pacífico chocoano, Urabá chocoano, Pacífico centro, pie de monte caucano, Nariño.



dificultades de funcionamiento, a la precariedad económica de la mayoría de los municipios y/o a la importancia relativa que le otorgan muchos alcaldes en cuanto a su efectividad en el acompañamiento de las gestiones de desarrollo regional ante el Estado central, esta federación se debe dimensionar como órgano interlocutor entre la región y ciertos sectores políticos e instancias del Estado central. La Federación, por tanto, tiene incidencia en la imagen política gubernamental de la región ante el resto del país. Sin embargo, en su plan que aboca varias temáticas, desde la financiera de los municipios, pasando por el fortalecimiento de la representación política, hasta la gestión educativa, en particular de la educación superior con el apoyo a la puesta en marcha de la Universidad del Pacífico, no queda nada claro sobre la manera como “se va a construir región desde la región”, según su lema, sino se aborda de una manera seria este problema, en relación con el Estado colombiano.

En su propuesta estratégica de retorno de desplazados y de prevención del desplazamiento forzoso en los ríos de Buenaventura, el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada, en el cual la Iglesia católica ha jugado un papel muy importante<sup>5</sup>, traza entre sus objetivos:

- Fortalecer el nivel de conciencia colectiva de las comunidades sobre el derecho al territorio ancestral y sobre las necesidades del retorno a los territorios de origen como alternativa propia y sustancial de vida.
- Desarrollar procesos de formación y capacitación comunitaria y líderes sobre deberes y derechos étnicos-territoriales y culturales en relación con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
- Comprometer a las entidades oficiales y privadas del nivel local, departamental y nacional.

Para el logro de estos objetivos se señala un conjunto de actividades, desde talleres hasta intercambios de experiencias entre comunidades; en suma, todas orientadas a la necesidad de ‘reactualizar’ dispositivos mentales y organizativos, reconociendo que las comunidades solas no van a poder conseguir el propósito de reconstruir sus vidas y rehacer sus posibilidades de convivencia comunitaria en condiciones dignas, reconociendo esta coyuntura de tanta incertidumbre frente al territorio.

---

<sup>5</sup> Debe destacarse, igualmente, la labor desempeñada por la trabajadora social Leila Arroyo, como funcionaria de la Red de Solidaridad Social en esta región.

La respuesta institucional en Buenaventura ha sido de diversa índole. Las evidentes trabas y dificultades que presenta la Red de Solidaridad para brindar atención adecuada y oportuna a los desplazados, son identificadas con cierta desesperanza por parte de las víctimas de esta catástrofe y del resto de los habitantes, quienes ante la precaria ayuda institucional, manifiestan niveles de solidaridad comunitaria en colectas de alimentos y ropas, elementos fundamentales<sup>6</sup>, teniendo en cuenta las críticas condiciones de desarraigo y desamparo en que ingresan estas comunidades campesinas a la ciudad. Paralela a las respuestas institucionales gubernamentales, tienen presencia las ONGs que, sectorizando por grupos poblacionales o bajo otros criterios de cobertura, vienen acompañando a las comunidades en su difícil instalación en la ciudad y en los procesos de retorno a sus territorios de origen, una vez las condiciones se han modificado. También debemos destacar el papel jugado por la organización Opción Legal, entidad que trabaja en escuelas, colegios y hogares comunitarios con niños víctimas del desplazamiento, formando además de los padres de familia y sus niños, a los maestros para facilitar la adaptación y la convivencia en la situación de emergencia que se presenta en el ambiente escolar; es decir, busca incidir en la adecuación y transformación de las prácticas pedagógicas apuntando a morigerar el impacto del desplazamiento en la población infantil. Infortunadamente su cobertura resulta reducida frente a la magnitud del problema. Por su parte, CECAN, una corporación de gran trayectoria de trabajo en el Valle del Cauca con sectores populares y comunidades marginadas en general, viene desempeñando, a través del acompañamiento comunitario y la capacitación en oficios, un importante papel con una visión de intervención integral, desde el ámbito de la reorganización económica de los individuos y las comunidades.

En este horizonte, las comunidades han desplegado algunas estrategias, tanto en el proceso de inserción urbana como en los esfuerzos para continuar en sus poblados resistiendo los embates de la guerra. Señalemos al menos tres formas de respuesta sobre las cuales tenemos algún conocimiento:

1. Ante los rumores de la llegada de los grupos armados a las poblaciones, la rotación entre las veredas y los caseríos de las quebradas, generalmente practicadas por pequeños grupos de po-

---

<sup>6</sup> Se debe aclarar que este tipo de recolectas se realiza a través de las juntas de acción comunal o grupos comunitarios que entregan a los desplazados las donaciones. Se trata entonces de no establecer relaciones personales y directas con los desplazados por el 'peligro' que representan y el temor a las represalias de los grupos armados, a menos que se trate de familiares o amigos.

bladores, se convierte en la alternativa preventiva más viable para evitar el desplazamiento fuera de su hábitat y permanecer dentro del territorio, aunque en una espacialidad restringida. Es decir, acudir a zonas de refugio ampliamente conocidas en la tradición y dejar los poblados vacíos y deshabitados, ante la presencia de la guerrilla o los paramilitares, les permite a las comunidades ejercer algunas actividades productivas del ‘monte’, actualizar o abrir caminos como soportes para las amplias redes de parentesco que le otorgan cohesión al territorio, así como nuevas posibilidades para la conservación y defensa de la vida.

2. Entre el grueso de los pobladores que se desplazan hacia las cabeceras municipales, unos se reportan como desplazados ante la Red de Solidaridad Social, mientras otros optan por camuflarse y eluden cualquier tipo de relación con esta entidad. Haciendo uso de sus redes de paisanaje y parentesco, y en general de su referencia a redes sociales presentes en la ciudad, evitan entonces ser calificados como desplazados. Tal condición aparece doblemente problemática, por un lado vergonzosa y por otro peligrosa, por las razones arriba expuestas. De tal forma que los espacios individuales en las casas de parientes y amigos se contraen por un tiempo, no sin conflictos internos, hasta tanto la familia logra algunos niveles de inserción económica en la ciudad, generalmente en las ventas ambulantes o estacionarias o en oficios varios. Lo destacable aquí es cómo aún en situaciones tan extremas, se insiste en una mentalidad de autonomía, tratando de resolver los problemas por sus propios medios, hecho que desde luego es cada vez más difícil y descarga al Estado de la responsabilidad que le corresponde.
3. Otros se quedan cumpliendo, con su presencia temerosa pero decidida, la función de vigías del territorio directamente en las veredas. Estos, como lo señala Jorge García para el caso de la costanariñense, se ven enfrentados al encierro: “[...] la gente tiene prohibido salir de sus caseríos so pena de ser considerada informante y por lo mismo merecedora de la muerte, bien pudiésemos decir que en medio de esta situación absurda, el secuestro colectivo es el verdadero estado de nuestros pueblos” (2002:6).

Estas estrategias, complementarias entre sí, combinan la concentración y la dispersión en tanto mecanismos conscientes para sobrevivir en medio del conflicto, recreando canales del tejido social-organizativo que permiten, aunque ahora de manera más restringida, darle continuidad a la circulación de los escasos recursos de que disponen; es decir, a la solidaridad y a la reciprocidad como claves para resistir. A las formas de

retorno no me referiré porque merecen una mirada muy detenida, dados los reacomodamientos que implican.

Justamente en este contexto emergen iniciativas como la del sacerdote Eloy, quien mojado y sudoroso por la travesía que venía haciendo en lancha desde la costa nariñense, con el ceño fruncido iluminó el día gris con su amplia sonrisa habitual diciéndome: “Vine a formalizar lo de la fundación acá en Buenaventura, porque allá las intenciones son de acabar a nuestra gente, la gente me está esperando para que nos reparáramos funciones”.

Paralelo a las respuestas que las comunidades han dado con base en sus saberes tradicionales y construcciones sociales, en relación con las alternativas planteadas por el Estado y las organizaciones no gubernamentales, aparecen también iniciativas organizativas agenciadas por individuos o grupos reducidos con experiencias en la gestión de ONG. En otras palabras, apoyados en el conocimiento de las comunidades, se perfila una ‘modernización de la organización’, visualizada como requisito indispensable para enfrentar la situación con niveles de legalidad, facilitar la captación de recursos —tanto nacionales como internacionales— y posibilitar un diálogo más horizontal con la institucionalidad implicada en esta problemática. En este sentido se puede plantear que en algunos contextos de la región se está reestructurando el andamiaje organizativo construido hace algún tiempo, en función de esta nueva situación; se están reensamblando diferentes sujetos y experiencias, entre los cuales la Iglesia católica cumple un papel fundamental como una de las instituciones de trabajo social más fuerte y continuado en la región.

A pesar de esta condición de exilio que tienen muchos líderes del proceso organizativo y de los consejos comunitarios y de los asesinatos sufridos, estos han ganado legitimidad en forma acelerada, tanto entre sus comunidades como entre los agentes externos. En el seno del terror resultan ser los interlocutores organizados más válidos para codiseñar orientaciones. En sus propuestas a las diferentes comisiones de verificación, han dejado explícita la visión que correlaciona autonomía y control territorial con el derecho a la vida, o sea el ejercicio pleno de la autodeterminación.<sup>7</sup>

De manera similar los líderes del proceso se movilizan estructurándose en el exilio, ganando nuevas visiones organizativas que vinculan en líneas

---

<sup>7</sup> Vale la pena destacar la función de los consejeros comunitarios en el apoyo a la experiencia de la granja agrícola de los desplazados llegados a Buenaventura en 1997, conformados como organización bajo el nombre de ASODEPAZ.

más definitivas las solidaridades transnacionales; es decir, que pese a los obstáculos, los mecanismos de resistencia y respuesta desde la comunidad afrocolombiana se están decantando. Por lo demás no debemos olvidar el papel de los exilios en muchos procesos de resistencia, que por decir lo menos, testimonian además de la creatividad un sentimiento de terquedad. Es claro para todos mi visión optimista en esta encrucijada, inspirada en la exhortación de doña Lucrecia.

Entonces subrayemos dos aspectos antes esbozados. Por un lado, los consejos comunitarios que, a pesar de su marco legal de constitución, seguían padeciendo de poca aceptación e incompreensión. Me refiero desde luego a sus directivos, cuyo reconocimiento se aceleró en medio de la guerra. De esta manera el consejo se situó como institución cohesiva y ganó profundidad en muchas zonas, superando en gran medida los escollos anteriores, con lo cual podemos plantear que aún en esta crítica situación de desarticulación comunitaria y social, la Ley 70 de 1993 ha brindado un soporte institucional y organizativo fundamental, que se reconoce fuertemente amenazado, pero actuante pese a las limitaciones que impone la coyuntura. Por otro lado, las relaciones muchas veces difíciles entre los directivos de los consejos comunitarios y los líderes políticos del proceso organizativo, de una manera paradójica en esta situación de crisis, se han transformado tras el mismo propósito. Por diferentes senderos y vías las redes organizativas se ordenan y fortalecen a nivel nacional, ubicando nuevos cauces de diálogo y/o ahondando los existentes.

Finalmente, reflexionemos lo planteado por Ernesto Sábato en su libro *La resistencia*, que se ajusta bastante bien a nuestra circunstancia, incitándonos por caminos que auguran persistentes señales vitales:

Si cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es paradójicamente una esperanza. Podremos recuperar esta casa que nos fue míticamente entregada. La historia siempre es novedosa. Por eso a pesar de las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están generando un nuevo curso al torrente de la vida (2000:89).

## Bibliografía

- Agier, Michel; Manuela Álvarez, Odile Hoffmann y Eduardo Restrepo  
1999 *Tumaco: haciendo ciudad*. Cali: ICAN-IRD-Universidad del Valle.
- Arboleda, Santiago  
1998 *Le dije que me esperara Carmela no me esperó -el Pacífico en Cali*. Cali: Universidad del Valle.
- Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada del Municipio de Buenaventura  
2000 “Lineamientos para el diseño y puesta en marcha de una estrategia de retorno de desplazados y de prevención del desplazamiento forzoso en los ríos del municipio de Buenaventura”. Buenaventura.
- Departamento Nacional de Planeación  
2001 “Documento Conpes 3115”. Mayo, Bogotá.
- Red de Solidaridad Social  
2000 “Documento Misión de observación de la situación humanitaria en los municipios de Buenaventura y Dagua del departamento del Valle del Cauca. Colombia”. Cali.
- Federación de Municipios de la Costa Pacífica Colombiana  
s.f. “Plan estratégico 2001-2003”. Mimeo.
- García, Jorge  
2002 “Etnia y conflicto en el Pacífico sur colombiano”. Mimeo, Tumaco.
- Informe Comisión Humanitaria  
2001 “Región del río Naya y Yurumagüí (Buenaventura- Valle) y Timba (Buenos Aires- Cauca)”.
- Jaramillo, Gerardo  
1972 “Monseñor Valencia. Vicariato Apostólico de Buenaventura”. Bogotá.

Molano, Alfredo

2001 *Desterrados. Crónicas del desarraigo.* Bogotá: El Áncora.

Sábato, Ernesto

2000 *La resistencia.* Buenos Aires: Seix Barral.

Valdivia, Luis

1994 *Buenaventura un desarrollo frustrado. Evolución económica y social del puerto.* Cali: Universidad del Valle.